

La tortura no tiene otro nombre

Amy Glover Drake

Como resultado de una demanda legal, el presidente Barack Obama hizo públicos cuatro memorandos confidenciales que detallan los fundamentos legales que utilizó el gobierno de George W. Bush para permitir el uso de la tortura en los interrogatorios de individuos acusados de ser terroristas. Obama describió estos acontecimientos como “un capítulo oscuro y doloroso de nuestra historia”, y dijo que su gobierno nunca más recurrirá a estos métodos para extraer información.

Representa un logro de transparencia, pero no es suficiente con reconocer el problema si dejamos de analizar cómo y por qué ocurrió, y así poder evitar una recaída en el futuro. Por esta razón el deseo de Obama de declarar “borrón y cuenta nueva” no es aceptable.

Una de las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre fue la pérdida de credibilidad de EU a raíz de la reacción de la administración de Bush a la tragedia. En vez de usar su autoridad moral para lanzar iniciativas coordinadas con sus aliados en contra del terrorismo, el gobierno tomó medidas unilaterales y puso en entredicho valores tan fundamentales para el país como la libertad de expresión y el respeto al estado de derecho. El uso de la tortura como método de interrogación para terroristas fue de los peores errores del gobierno de Bush e hizo mucho daño a la reputación del país. A la gente pacífica, lo que más nos asusta de los terroristas es su falta de humanidad, y el uso de la tortura tiende a borrar la línea moral que nos separa de ellos.

El presidente Obama señaló que los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que llevaron a cabo dichos actos de tortura no serán procesados por la justicia. Esta decisión se entiende dado que los hechos sucedieron con el visto bueno legal de los abogados de la Casa Blanca. Los memorandos en cuestión forman una lectura escalofriante, y ofrecen una descripción clínica de cómo implementar ciertas técnicas como la privación del sueño, el ahogamiento simulado y el uso de fobias a los insectos en espacios reducidos. Pero lo más importante es que dichos documentos forman la base legal para incurrir en prácticas de tortura. No queda claro entonces por qué debería haber impunidad para los abogados y los políticos que tomaron la decisión de alterar las definiciones claramente establecidas en la Convención de Gi-

nebra y en la Convención contra la Tortura.

Poco después de la inauguración del presidente Obama, el ex vicepresidente Dick Cheney defendió la estrategia de su gobierno, particularmente en cuanto al uso de *enhanced interrogation*, una frase código que podría traducirse como tortura suave —si es que ese concepto existiera—. “Si no hubiéramos hecho lo que hicimos —respecto del programa de vigilancia terrorista, las técnicas de interrogación agresivas para detenidos de alto peligro, el Acta Patriota, entre otros—, hubiéramos enfrentado otro ataque”, argumenta Cheney.

La amenaza de un nuevo acto terrorista siempre fue la justificación para los abusos de la administración Bush contra las garantías individuales. Pero hay que preguntarse si la tortura es realmente una herramienta útil para obtener información. Varias personas destacadas que la han vivido en carne propia como prisioneros de guerra opinan que no. Tal es el caso de John McCain, republicano de hueso colorado, quien ha argumentado a lo largo de su carrera que la tortura no funciona porque la información que se consigue es por lo general falsa y que, además, perdemos nuestra brújula moral en el proceso.

Ayer Obama señaló no querer emitir un juicio anticipado sobre el sustento legal que se dio desde la Casa Blanca a los actos de tortura, lo que por lo pronto puede ser una buena señal.

“Este es un tiempo de reflexión, no de revancha”, ha dicho Obama, pero el presidente no puede cerrar la puerta a un juicio legal de esta magnitud con un simple discurso.

Se puede entender que Obama quiera evitar una batalla política con el Partido Republicano dada la fragilidad de la economía y la necesidad de fomentar el trabajo bipartidista en Washington, pero el tema de la tortura es demasiado importante como para ignorarlo. Si no aclaramos de una vez por todas cuál es la postura estadounidense respecto del uso de la tortura, será fácil que una administración futura tenga la tentación de recurrir a ella nuevamente. Habrá que revisar toda la información disponible y formular una estrategia para asegurar que la tortura jamás vuelva a utilizarse en una de las democracias más avanzadas del mundo. Sobre todo, es importante que los responsables de introducir la tortura como una herramienta del Estado rindan cuentas ante la justicia.

Analista y miembro del Comext

